

Santiago, catorce de julio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

En causa RUC N° 1801020079-9, RIT N° 439-2019 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, por sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, se condenó al acusado **Ignacio Alejandro Villagra Jara**, como autor del delito de receptación de vehículo motorizado, en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A, inciso tercero, del Código Penal, cometido el 18 de octubre de 2018, en Viña del Mar, a la pena de tres (3) años y un (1) día de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales y multa de cinco (5) Unidades Tributarias Mensuales. Sanción corporal de cumplimiento efectivo.

En contra de esa decisión la defensa del acusado interpuso recurso de nulidad, el que fue conocido en la audiencia pública celebrada el veinticuatro de junio último, disponiéndose *-luego de la vista-* la notificación del presente fallo vía correo electrónico a los intervinientes, según consta del acta levantada en su oportunidad.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de nulidad deducido en autos se funda, en primer término, en la causal de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, en relación con lo preceptuado en el artículo 19, numeral 3°, inciso quinto de la Constitución Política del Estado, en cuanto el impugnante estima vulnerado su derecho al debido proceso.

Refiere que ello se produjo toda vez que en la especie se aceptó la declaración de un testigo, el cual no fue debidamente identificado en la etapa de



juicio oral. Al efecto, expone que compareció al juicio oral el testigo del Ministerio Público don Joel Ñancucheo Villafaña, funcionario de Carabineros de Chile, sin portar algún documento que lo identificara, pese a lo cual la magistrado presidente vio en el celular del testigo fotografías digitales de un documento, al parecer de la licencia de conducir o identificación de Carabineros, no de la cédula de identidad y con esta sola observación se autorizó su declaración, sin que pudiera evidenciar la veracidad de lo que vio la magistrado, puesto que a él no se le exhibió la fotografía.

Arguye que la participación en el juicio oral de un testigo, cuya identidad no se pudo acreditar, es una infracción grave, más, cuando de los cuatro testigos del Ministerio Público, sólo dos están contestes en los hechos, de forma que de no haber prestado declaración este testigo, como debió ser, el Ministerio Público no podría haber probado su teoría y el tribunal no hubiese podido fallar en forma condenatoria.

Por otra parte, alega vulneración al debido proceso al no haber podido ejercer debidamente la herramienta contemplada en el artículo 332 del Código Procesal Penal, ya que ninguno de los cuatro testigos pudo ser correctamente contrainterrogado por la defensa porque no eran capaces de leer sus propias declaraciones, por letras ilegibles y los dos funcionarios de Carabineros porque según ellos, ambos usaban anteojos y ninguno fue con lentes al juicio.

En el mismo sentido indica que, en cuanto a la declaración del testigo Joel Ñancucheo, comenzó su relato y estaba declarando todo en verbo condicional y el fiscal derechamente lo corrigió, le indicó que estaba declarando en condicional, de forma que le pidió que declara en forma de verbo presente para que no quedara



duda de lo que estaba diciendo, lo que constituye una clara intromisión y manipulación del testigo en cuanto su declaración, dejando de ser ésta libre y espontánea.

Finaliza solicitando anular tanto el fallo como el juicio oral, retrotrayendo el procedimiento al estado de celebrase una nueva audiencia de juicio oral por tribunal no inhabilitado al efecto o, que se anule la sentencia y se dicte fallo de reemplazo que ante la exclusión del testimonio del testigo incapacitado para declarar, sea absolutoria.

SEGUNDO: Que el hecho que se ha tenido por establecido por los sentenciadores del grado, en el motivo quinto de la sentencia que se impugna, es el siguiente:

“El 18 de Octubre de 2018 aproximadamente a la 01:00 hora de la madrugada, en circunstancias que personal de Carabineros realizaba patrullaje preventivo en el sector de Santa Inés, Viña del Mar, recibió información telefónica de Franco Moll Mena quien les refirió que le había sido robado su station wagon, marca “Hyundai”, modelo “Santa Fe”, placa patente CRWH.37, desde Avenida Concón, sector de Santa Inés. Mientras los funcionarios se desplazaban en búsqueda del móvil se les cruzó el vehículo reportado en calle 18 Norte con Avenida Concón por lo que se inició una persecución dado que su conductor, el acusado Villagra aceleró y se dio a la fuga hasta un momento en que el acusado descendió del móvil por la puerta del conductor y los otros 2 ocupantes no identificados, descendieron por el costado derecho del vehículo, continuando el acusado su huida a pie logrando finalmente ser detenido, sabiendo o no pudiendo menos que saber Ignacio Villagra que el vehículo que manejaba y que mantenía



en su poder era producto de un ilícito, ya que éste, había sido sustraído a su propietario Franco Moll en un tiempo inmediato. Al momento de ser registrado, al acusado Villagra le fue encontrado, en un bolsillo del jeans que vestía, 1 desatornillador modificado, 1 llave de auto modificada y 1 control de activación y desactivación del tipo universal, de alarma” (sic).

TERCERO: Que, en lo concerniente a la infracción denunciada por el recurso de nulidad deducido por la defensa, cabe indicar que el debido proceso es un derecho asegurado por la Constitución Política de la República y que consiste en que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y al efecto, el artículo 19, N° 3, inciso sexto, confiere al legislador la misión de definir las garantías de un procedimiento racional y justo. Sobre los presupuestos básicos que tal garantía supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Chile que están en vigor y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas.

CUARTO: Que, de la lectura de la causal principal de nulidad invocada por la defensa del acusado, se desprende que ésta ha sostenido, en primer término, que se vulnera su garantía del debido proceso, al no haberse acreditado de forma legal la identidad de uno de los testigos presentados por el ente persecutor. En un segundo orden de ideas, plantea que no pudo ejercer debidamente la herramienta



contemplada en el artículo 332 del Código Procesal Penal, ya que ninguno de los cuatro testigos pudo ser correctamente contrainterrogado por la defensa porque no eran capaces de leer sus propias declaraciones y; finalmente, que el fiscal intervino inadecuadamente, señalándole de modo expreso a uno de los deponente de cargo, en que tiempo verbal debía efectuar su atestado.

QUINTO: Que, de la lectura de las argumentaciones formuladas por la defensa, se desprende que las mismas son de carácter meramente formal en cuanto apuntan a situaciones producidas en el juicio que le habrían ocasionado un perjuicio, sin precisar acabadamente los aspectos que habrían determinado la decisión de condenar a los acusados, atendida su trascendencia y entidad. Lo único concreto que alega la defensa es que uno de los testigos depuso pese a no haber comparecido con su cédula de identidad; que no pudo contrainterrogar adecuadamente y que; el fiscal intervino en la declaración de los testigos de cargo.

Que, como se evidencia, en esta fundamentación no se sostiene alguna vulneración de derechos o garantías constitucionales que hayan incidido causalmente en el resultado del juicio, de manera sustancial como lo previene la causal de nulidad empleada por la defensa.

Con todo, valga reiterar que el reclamante no explica a este Tribunal –*de la manera concreta y específica exigible en un recurso de derecho estricto*– cuál es la precisa garantía constitucional personal que le fue desconocida con directa influencia en la sentencia condenatoria dictada en su contra. (SCS Roles N° 59504-20, de 22 de junio de 2020 y N° 104.468-2020, de 13 de octubre de 2020)

SEXTO: Que, debe tenerse además en consideración –*respecto del primer reclamo formulado por el impugnante*–, lo preceptuado por el artículo 292 del



Código Procesal Penal, en cuanto dicha norma establece, en lo pertinente, que “*El juez presidente de la sala dirigirá el debate, ordenará la rendición de las pruebas, exigirá el cumplimiento de las solemnidades que correspondieren y moderará la discusión*”. Es decir, es el juez presidente quien debe velar por la correcta acreditación de la identidad de quienes participan del juicio oral, deber que -según los propios dichos del recurrente- cumplió al determinar la identidad del testigo Joel Ñancucheo Villafaña, mediante el documento contenido en un dispositivo electrónico que le fue exhibido, lo que descarta la infracción normativa denunciada en el arbitrio de nulidad.

En el mismo sentido, debe evidenciarse que, de la lectura de la sentencia en revisión, no aparece que la defensa haya incidentado sobre la identidad del antes referido testigo. Además, tampoco se aportó por el recurrente, a la vista del recurso de nulidad, prueba de audio alguna que diera cuenta de dicha circunstancia, siendo ello de su cargo.

Finalmente, conviene subrayar que, la prueba rendida fue sometida al escrutinio de todos los intervinientes, así como del tribunal, bajo el respeto de los principios de bilateralidad de la audiencia, oralidad, publicidad e inmediación, de los que se colige la dualidad de posiciones, la contradicción y la igualdad de las partes; resguardos tenidos en consideración para tutelar la garantía constitucional del debido proceso, especialmente en lo referido al derecho de la defensa, en su dimensión de controlar la prueba de cargo, luego de lo cual los jueces dentro de sus facultades soberanas decidieron asignar pleno mérito a tales declaraciones, por lo que no se advierte infracción de derecho alguna.



En consecuencia y por las razones antes desarrolladas, las contravenciones denunciadas carecen de sustento fáctico y de la sustancialidad que la hipótesis de nulidad en estudio exige para producir los efectos que le son propios, esto es, que sea insalvable ante el derecho al debido proceso, conforme ya se explicitó en los razonamientos que anteceden, razones por las cuales la causal de nulidad en análisis será desestimada.

SÉPTIMO: Que, como primera causal subsidiaria de nulidad, el impugnante invoca aquella contenida en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 342 letras c) y d), y 297 del mismo cuerpo de normas.

Explica que la víctima no recordaba la fecha de los hechos, la hora de los mismos y ni siquiera cuál era la placa patente de su vehículo, no obstante lo cual, los funcionarios policiales, que en más de dos años - *tiempo transcurrido entre los hechos y la declaración*- han tenido numerosos procedimientos policiales, recordaban sin problema de memoria la placa patente del automóvil, por lo que no cabe ninguna duda, que Carabineros de Chile preparó y se aprendió, previo al juicio, su testimonio.

Agrega que además el testimonio de don Víctor Pinilla Palacios, contradice toda la teoría del Ministerio Público, ya que a la misma hora que supuestamente su representado estaría sustrayendo y conduciendo el vehículo marca Hyundai Santa Fe blanco por la calle Santa Inés, este deponente lo ve caminando, por una calle distinta, acercándose a su auto.

Indica que ese mismo testigo, dijo que junto con los vecinos que detuvieron a su representado, registraron las vestimentas y encontraron la llave de un auto afilada, situación que es corroborada por la exhibición del video de la detención,



donde se ve que la llave es mostrada por una tercera persona, pero ello es contrario a la versión de Carabineros, que declara que ellos le registraron las vestimentas y encontraron la llave, más un atornillador y un aparato para levantar seguros de las puertas.

Alega también que la conclusión a la que arriba el tribunal respecto de este testigo, en cuanto a la posible explicación de la hora que salía en el video que se le exhibió, no se corresponde con lo por él declarado, ya que dijo no estar seguro de la hora que salía en el registro, pero que había un desfase, sin decir si era anterior o posterior a la hora efectiva.

Expone que los dichos de los otros dos funcionarios de Carabineros, fueron contradictorios entre sí, en cuanto a la fecha, al lugar en que ven el vehículo, a la distancia de la camioneta y la dirección de la huida de los sujetos que se bajan del vehículo.

Concluye solicitando que se anule el juicio oral y la sentencia, señalándose el estado en que debe quedar el proceso, y ordenando la realización de un nuevo juicio oral ante un tribunal no inhabilitado.

OCTAVO: Que, de la sola lectura de los fundamentos de la causal en estudio, es posible colegir que a través de su reclamo lo que se pretende es revertir una calificación jurídica no compartida por la defensa, mas no la inexistencia de *“La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dicha conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”* y de *“Las razones legales o doctrinales que sirvieran para calificar jurídicamente*



cada uno de los hechos y sus circunstancias y para fundar el fallo” como contemplan las letras c) y d) del artículo 342 del Código Procesal Penal, a lo que debe sumarse que en los fundamentos sexto y octavo del fallo los sentenciadores del grado exponen las razones por las que tuvieron por acreditados tanto el hecho punible como la participación del acusado en el mismo.

Conforme lo antes expuesto, el motivo de nulidad en comento no podrá prosperar.

NOVENO: Que, la segunda causal subsidiaria de nulidad hecha valer por el impugnante es la contemplada en el artículo 374 letra f) del Código Procesal Penal, en relación al art. 341 del mismo cuerpo de normas, en cuanto denuncia como infringido el principio de la congruencia, por cuanto durante el alegato de clausura, el fiscal esbozó una teoría distinta, en la que el imputado habría intentado sustraer un segundo automóvil, de acuerdo a lo señalado tanto por el imputado como por el testigo don Víctor Pinilla. Alega que si bien esta teoría es absolutamente contraria a lo que los propios funcionarios policiales declararon, el tribunal hizo eco de esta teoría y lo señaló en su oportunidad en la sentencia.

Argumenta que el tribunal al acoger, erradamente estos nuevos hechos, los cuales, incluso pueden ser constitutivos de un delito como robo en bien nacional de uso público en grado de tentativa, debió abrir debate a esta situación, si no lo hizo, no debió nunca hacer eco de esta nueva teoría del Ministerio Público.

Pide que se anule el juicio oral y la sentencia, señalándose el estado en que debe quedar el proceso, y ordenando la realización de un nuevo juicio oral ante un tribunal no inhabilitado.



DÉCIMO: Que, para efectos de desestimar tal motivo de nulidad debe tenerse presente que efectuado el cotejo entre la acusación y la sentencia no existe diferencia alguna entre sus contenidos, de modo que la incongruencia denunciada por la defensa no es tal, lo que lleva al rechazo de la segunda causal subsidiaria de nulidad.

UNDECIMO: Que, en consecuencia, al no haberse configurado ninguna de las hipótesis de nulidad invocadas por la defensa de los acusados, el arbitrio en análisis será rechazado en todos sus extremos.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 373 letras a) y b); 374 literal e) y; 384 del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA** el recurso de nulidad deducido por la defensa del acusado Ignacio Alejandro Villagra Jara, contra la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, y contra el juicio oral que le antecedió en el proceso RIT N° 493-2019 y RUC N° 1801020079-9, los que, por consiguientes, no son nulos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del fallo a cargo del Ministro (s) Sr. Zepeda.

Rol N° 17.440-2021.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Sra. María Teresa Letelier R., el Ministro Suplente Sr. Jorge Zepeda A., y la Abogada Integrante Sra. Carolina Coppo D. No firma el Ministro Sr. Brito y el Ministro Suplente Sr. Zepeda, no obstante haber



estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con licencia médica y por haber concluido su período de suplencia, respectivamente.



En Santiago, a catorce de julio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

